Revista Kera yvoty
reflexiones sobre la cuestión social

ARTÍCULO ORIGINAL
Kera yvoty, vol. 9, núm. 1, 2024, e4232
https://doi.org/10.54549/ky.2024.9.e4232

Paraguay en la encrucijada: avances y retrocesos en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado según los índices CCC y GI-TOC de 2023

Paraguay at a crossroads: progress and setbacks in the fight against corruption and organized crime according to the 2023 CCC and GI-TOC indices

Carlos Peris[1]

[1] Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Sociales. San Lorenzo, Paraguay.
Correspondencia: carlosperisc@gmail.com

RESUMEN

El presente artículo científico tiene como objetivo analizar el impacto de la corrupción y el crimen organizado en la configuración actual del Paraguay, a través de un estudio comparativo basado en dos informes: el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2023 y el Índice Global de Crimen Organizado 2023. Mediante una metodología de análisis documental y comparativo, se examinan los hallazgos de ambos reportes, identificando las interrelaciones entre estos fenómenos y sus implicancias sociales, políticas y económicas. Los resultados revelan que, si bien Paraguay ha realizado avances en materia de transparencia, cooperación internacional y políticas anticorrupción, persisten graves problemas que socavan la institucionalidad democrática y el estado de derecho. La corrupción sistémica, la impunidad y la penetración de actores criminales en las estructuras estatales configuran un escenario de alta complejidad. Se concluye sobre la necesidad de fortalecer la integridad y la independencia de los poderes del Estado, promover una cultura de legalidad y ética pública, y articular acciones integrales que involucren a la sociedad civil y al sector privado en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Palabras clave: Paraguay, corrupción, crimen organizado, institucionalidad democrática, estado de derecho.

ABSTRACT

The objective of this scientific article is to analyze the impact of corruption and organized crime on the current configuration of Paraguay, through a comparative study based on two reports: the Capacity to Combat Corruption Index (CCC) 2023 and the Global Organized Crime Index 2023. Using a methodology of documentary and comparative analysis, the findings of both reports are examined, identifying the interrelationships between these phenomena and their social, political, and economic implications. The results reveal that, although Paraguay has made progress in terms of transparency, international cooperation, and anti-corruption policies, serious problems persist that undermine democratic institutions and the rule of law. Systemic corruption, impunity, and the penetration of criminal actors into state structures create a highly complex scenario. The article concludes on the need to strengthen the integrity and independence of the branches of government, promote a culture of legality and public

Artículo de acceso abierto. CC BY 4.0

Editor Responsable: Carmen García
Universidad Nacional de Asunción,
Facultad de Ciencias Sociales.
San Lorenzo, Paraguay.

Recibido: 07-03-2024
Aceptado: 17-06-2024

ethics, and articulate comprehensive actions that involve civil society and the private sector in the fight against corruption and organized crime.

Keywords: Paraguay, corruption, organized crime, democratic institutions, rule of law.

INTRODUCCIÓN

El crimen organizado y la corrupción se constituyen, sin duda, en dos de los problemas más graves que enfrentan las democracias de hoy en día, sobre todo en América Latina. Estos fenómenos no son estancos, están interconectados y se alimentan el uno al otro, distorsionando la economía, debilitando la legitimidad de las instituciones y perjudicando la calidad de vida de la gente (Moriconi y Peris, 2019; Perz, 2023).

Paraguay no se salva de esta realidad. A pesar de que en los últimos años se han hecho esfuerzos, principalmente gracias a iniciativas de la cooperación internacional, para fortalecer su capacidad anticorrupción y luchar contra las redes delictivas, dicho país mediterráneo sigue teniendo altos niveles de corrupción percibida y una creciente presencia de organizaciones criminales, mismas que se infiltran en las estructuras del Estado y socavan seriamente el estado de derecho (Duarte, 2022; Peris, 2024).

Teniendo en cuenta lo mencionado, el objetivo de este artículo es analizar cómo la corrupción y el crimen organizado están afectando y dando forma al Paraguay de hoy en día. Lo dicho se realizará mediante la exposición y conjunción de los informes: a) Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2023, que elaboró la organización Control Risks, y b) Índice Global de Crimen Organizado 2023, que desarrolló Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

En concreto, se propone:

1. Revisar lo que se encontró en estos dos reportes sobre la situación actual de Paraguay en cuanto a corrupción y crimen organizado.
2. Ver cómo estos fenómenos se relacionan entre sí y qué implicancias tienen para la democracia y el desarrollo del país.
3. Plantear algunas recomendaciones para fortalecer la integridad pública, la transparencia y la lucha contra las redes delictivas.

La estructura del estudio, primeramente, consistirá en exponer de manera breve una discusión teórica sobre el problema de la corrupción como fenómeno y los alcances del crimen organizado (los puntos de partida). Luego, se pasará a presentar las principales conclusiones de los dos informes analizados (los contextos). Por último, se desarrollará la unión de ambos textos, en dos apartados denominados “Interrelaciones entre corrupción y crimen organizado: un círculo vicioso” e “Implicancias para la institucionalidad democrática y el desarrollo”, para luego pasar a las reflexiones finales.

La importancia del presente artículo científico se radica, en primer lugar, en que busca entender de manera integral los factores que están dando forma a la realidad de Paraguay, yendo más allá de enfoques parciales o sectoriales. En segundo lugar, se espera poder contribuir al debate público y académico sobre cuáles son las estrategias más efectivas para enfrentar estos desafíos y defender, desde una mirada amplia, los valores democráticos. Esto último es fundamental, especialmente si se desea implementar políticas sociales que realmente sirvan a la población, esencialmente en lo que tiene que ver con una seguridad que abarque múltiples dimensiones.

Primer punto de partida: la multidimensionalidad de la corrupción

La corrupción es un concepto complejo y multifacético, que ha sido abordado desde distintas disciplinas y enfoques teóricos. En términos generales, puede definirse como el abuso de poder público para obtener beneficios

privados indebidos (Transparency International, 2021). Sin embargo, esta definición no agota la diversidad de manifestaciones y dimensiones que presenta la corrupción en la práctica.

Desde una perspectiva económica, la corrupción ha sido analizada como una distorsión que afecta la eficiencia de los mercados, genera incentivos perversos y socava la competitividad (Méon y Sekkat, 2005). Los actos corruptos, como el soborno, la malversación o el tráfico de influencias, introducen costos adicionales en las transacciones, favorecen la asignación subóptima de recursos y reducen la inversión productiva (Mauro, 1995).

Desde un enfoque institucionalista, la corrupción es vista como un síntoma de debilidad en las reglas y normas que regulan el funcionamiento del Estado y su relación con los ciudadanos (Acemoglu y Robinson, 2012). La ausencia de controles efectivos, la discrecionalidad excesiva de los funcionarios y la falta de rendición de cuentas crean oportunidades para el abuso de poder y la captura de las decisiones públicas por intereses particulares (Rose-Ackerman y Palifka, 2006).

En una dimensión política, la corrupción erosiona la legitimidad y la confianza en las instituciones democráticas, distorsiona los procesos electorales y atenta contra el principio de igualdad ante la ley (Warren, 2004). Cuando los ciudadanos perciben que las autoridades actúan en beneficio propio y no del bien común, se genera un clima de desafección y cinismo que puede derivar en inestabilidad y conflictividad social (Seligson, 2002).

Desde una mirada sociológica, la corrupción se vincula con patrones culturales, valores y prácticas sociales que toleran o incluso celebran el éxito individual por encima de las normas éticas (Husted, 1999). En contextos de alta desigualdad y baja movilidad social, la corrupción puede ser vista como un atajo para el ascenso económico y el reconocimiento colectivo (Salgado, 2013).

Esta breve revisión teórica da cuenta de la complejidad del fenómeno de la corrupción y la necesidad de abordarlo desde una perspectiva multidimensional e interdisciplinaria. Solo así es posible captar sus diversas causas, manifestaciones e impactos en el entramado social, político y económico de una nación.

Segundo punto de partida: el crimen organizado como amenaza transnacional

El crimen organizado es otro concepto de difícil delimitación, que ha sido objeto de múltiples definiciones y debates académicos. En un sentido amplio, puede entenderse como una forma de delincuencia compleja, estructurada y persistente en el tiempo, que busca obtener beneficios económicos a través de actividades ilegales (UNODC, 2021).

Desde un enfoque económico, el crimen organizado ha sido analizado como una industria o empresa ilícita, que opera en mercados prohibidos o restringidos, aprovechando las debilidades del Estado para maximizar ganancias y minimizar riesgos (Gambetta, 1993). Los grupos criminales se especializan en la provisión de bienes y servicios ilegales (drogas, armas, trata de personas), así como en la infiltración de sectores legales para el lavado de activos (Schelling, 1971).

Desde una perspectiva institucional, el crimen organizado surge y se expande en contextos de vacíos de poder, corrupción endémica y baja capacidad estatal para hacer cumplir la ley (Bovier, 2002). Las organizaciones delictivas establecen vínculos de protección e intercambio con actores políticos y económicos, capturando instituciones clave para garantizar impunidad y facilitar sus negocios ilícitos (Garay-Salamanca y Salcedo-Albarán, 2012).

En una dimensión transnacional, el crimen organizado ha adquirido un alcance global, aprovechando las oportunidades que brinda la globalización económica, la revolución digital y la mayor interconectividad entre países (Naím, 2006). Las redes criminales trascienden fronteras, diversifican sus actividades y establecen alianzas estratégicas, desafiando la capacidad de los Estados nacionales para enfrentarlas (Wagley, 2006).

Desde un enfoque de seguridad, el crimen organizado representa una amenaza para la

integridad territorial, el monopolio estatal de la violencia y la vigencia de los derechos humanos (Rojas Aravena, 2006). Los grupos delictivos disputan el control de territorios y poblaciones, generan climas de miedo e inseguridad, y socavan la legitimidad de las autoridades a través de la intimidación o la complicidad (Bailey y Taylor, 2009).

En síntesis, el crimen organizado es un fenómeno multidimensional que involucra aspectos económicos, institucionales, transnacionales y de seguridad. Su complejidad requiere un abordaje integral que trascienda las respuestas puramente represivas y se enfoque en la prevención, la inteligencia financiera, la cooperación internacional y el fortalecimiento del estado de derecho (Nagle, 2002).

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este artículo se utilizó una metodología de análisis documental y comparativo, basada en la revisión exhaustiva de dos informes clave: el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2023, elaborado por la organización Control Risks, y el Índice Global de Crimen Organizado 2023, desarrollado por el consorcio Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

El CCC evalúa la capacidad de los países para detectar, castigar y prevenir la corrupción en base a tres categorías: capacidad legal, democracia e instituciones políticas, y sociedad civil y medios de comunicación. Cada categoría se compone de variables específicas que son ponderadas y agregadas para obtener una puntuación final en una escala de 0 a 10, donde 10 indica la mayor capacidad para combatir la corrupción.

Por su parte, el Índice Global de Crimen Organizado mide la influencia de los mercados criminales y los actores en cada nación, así como la resiliencia de los países frente al crimen organizado. El índice se basa en dos dimensiones principales: criminalidad (compuesta por mercados criminales y actores) y resiliencia (que incluye aspectos políticos, económicos y sociales). Cada dimensión se desagrega en indicadores que son puntuados en una escala de 1 a 10, donde 10 representa los mayores niveles de criminalidad o resiliencia.

La selección de estos informes responde a su reconocida rigurosidad metodológica, su enfoque multidimensional y su actualización periódica, que permite contar con datos recientes y comparables entre países. Además, ambos reportes incluyen a Paraguay en su análisis, lo que posibilita un examen específico de su situación en materia de corrupción y crimen organizado.

El procedimiento de análisis consistió en tres etapas:

1. Revisión detallada de los informes, extrayendo los datos, puntuaciones y valoraciones cualitativas referidas a Paraguay en cada una de las dimensiones e indicadores considerados.
2. Comparación de los hallazgos de ambos reportes, identificando convergencias, divergencias y posibles interrelaciones entre los fenómenos de la corrupción y el crimen organizado en el contexto paraguayo.
3. Interpretación de los resultados a la luz del marco teórico propuesto, discutiendo sus implicancias para la institucionalidad democrática, el desarrollo económico y la seguridad ciudadana.

Cabe señalar que este estudio presenta algunas limitaciones, derivadas de su naturaleza eminentemente documental y de la complejidad de los fenómenos abordados. Si bien los índices utilizados proporcionan una aproximación valiosa, no agotan la multidimensionalidad de la corrupción y el crimen organizado, ni capturan todas sus manifestaciones y dinámicas territoriales. Futuras investigaciones podrían complementar este análisis con estudios de caso, entrevistas a actores clave y trabajo de campo en zonas especialmente afectadas por estas problemáticas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Primer contexto: la situación de Paraguay en el Índice de Capacidad

para Combatir la Corrupción 2023

De acuerdo con el CCC 2023, Paraguay obtuvo una puntuación general de 4,61, ubicándose en el puesto 11 de los 15 países latinoamericanos evaluados. Si bien este puntaje representa un aumento del 4% respecto a la medición anterior, evidenciando una tendencia positiva, el país aún se encuentra por debajo del promedio regional en su capacidad para enfrentar la corrupción.

En la categoría de "Capacidad Legal", Paraguay registró avances en la variable que mide la cooperación internacional en materia de orden público, empatando con Costa Rica en el primer lugar. Esto se explica por los esfuerzos realizados para mejorar el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, que derivaron en la exclusión del país de la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Sin embargo, persisten debilidades significativas en otras variables clave, como la independencia y eficacia de los organismos anticorrupción, la calidad de los instrumentos de delación premiada y el nivel de conocimientos y recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco. Esto sugiere que, más allá de los progresos normativos, existen obstáculos estructurales que limitan la efectividad de las instituciones encargadas de prevenir, detectar y sancionar la corrupción.

En cuanto a la categoría "Democracia e Instituciones Políticas", el informe destaca la incidencia de acusaciones de corrupción que apuntan al gobernante Partido Colorado, incluyendo señalamientos y sanciones de Estados Unidos contra altos funcionarios como el expresidente Horacio Cartes y el actual vicepresidente Hugo Velázquez. Estos hechos reflejan la persistencia de prácticas corruptas en las esferas de poder y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas.

Asimismo, se advierte sobre la politización como un obstáculo para la persecución de casos de corrupción que involucran al partido oficialista. La anterior fiscal general, Sandra Quiñonez, fue cuestionada por su aparente falta de voluntad para investigar estos hechos, lo que evidencia la fragilidad de la independencia judicial y la captura de las instituciones por intereses partidarios.

En la categoría "Sociedad Civil y Medios de Comunicación", Paraguay superó el promedio regional en la variable que mide la movilización ciudadana contra la corrupción. Este dato es alentador, ya que sugiere una mayor conciencia y participación de la población en la denuncia y el rechazo a las prácticas corruptas. Sin embargo, como se verá más adelante, la sociedad civil aún enfrenta desafíos importantes para incidir de manera efectiva en las políticas anticorrupción

.

Segundo contexto: el crimen organizado en Paraguay según el Índice Global 2023

El Índice Global de Crimen Organizado 2023 ubica a Paraguay en una situación preocupante, con una puntuación de criminalidad de 7,52 (sobre 10) y un nivel de resiliencia de apenas 3,42 (sobre 10). Esto posiciona al país en el cuarto lugar a nivel mundial, el tercero en el continente americano y el segundo en Sudamérica en términos de la influencia de los mercados y actores criminales.

En la dimensión de "Mercados Criminales", se destacan como principales problemáticas el tráfico de armas (con una puntuación de 9), el comercio de cocaína (8,5), el tráfico de cannabis (9) y la extorsión y cobros ilegales por protección (7). Estas cifras dan cuenta de la diversidad y complejidad de las actividades delictivas que tienen lugar en el territorio paraguayo, así como de su impacto en la seguridad y la economía del país.

En cuanto al tráfico de armas, el informe señala que Paraguay se ha convertido en un importante centro regional, siendo Brasil el principal mercado de destino. La corrupción en todos los niveles del Estado ha permitido la importación legal de un número considerable de armas que acaban vendiéndose en mercados delictivos. Además, se denuncia la participación de funcionarios públicos en connivencia con bandas criminales brasileñas que operan en

ciudades paraguayas.

Respecto al narcotráfico, Paraguay es identificado como un país clave en la producción y tránsito de cocaína y cannabis. Se estima que unas 200 toneladas de cocaína pasan anualmente por el territorio, provenientes principalmente de Bolivia y Perú. Asimismo, el país es considerado el mayor productor ilegal de marihuana en Sudamérica, destinada sobre todo al mercado brasileño. El informe advierte sobre la participación de élites locales y actores estatales en el control de estos mercados ilícitos.

La extorsión y el cobro de "impuestos" por parte de grupos criminales también emergen como una problemática en ascenso. Se mencionan prácticas como la extorsión digital a través de redes sociales y el cobro de un "impuesto revolucionario" por parte de grupos guerrilleros. Estos hechos dan cuenta de la capacidad de intimidación y control territorial que ejercen las organizaciones delictivas.

En la dimensión de "Actores Criminales", el índice otorga puntuaciones altas a todas las categorías: grupos de tipo mafioso (8), redes criminales (8), actores integrados en el Estado (9), actores extranjeros (9) y actores del sector privado (7,5). Esto refleja la diversidad y peligrosidad de los agentes que participan en las economías ilegales del país.

Se destaca la fuerte influencia de actores estatales en la facilitación de actividades delictivas, desde funcionarios de seguridad de bajo nivel hasta altos cargos políticos. La corrupción aparece como una constante que obstaculiza la persecución de grupos criminales y crea un clima de impunidad. Asimismo, se advierte sobre la presencia de organizaciones extranjeras, principalmente bandas brasileñas y mafias de origen asiático, que operan en connivencia con políticos y empresarios locales.

En cuanto a la "Resiliencia" frente al crimen organizado, Paraguay exhibe debilidades en todas las áreas evaluadas. Los puntajes más bajos corresponden a liderazgo político y gobernanza (2), sistema judicial y detención (2,5), cuerpos de seguridad (2), prevención (3) y transparencia y rendición de cuentas (3). Esto evidencia la fragilidad institucional del país para enfrentar de manera efectiva las amenazas criminales.

Entre los principales desafíos se mencionan la politización y corrupción en el sistema de justicia, con altos niveles de impunidad para los delitos de cuello blanco; la connivencia de las fuerzas de seguridad con grupos delictivos; la limitada capacidad estatal para controlar las zonas fronterizas y los puntos ciegos del territorio; y la debilidad de las políticas de prevención, que dependen más de actores no gubernamentales que del propio Estado.

Interrelaciones entre corrupción y crimen organizado: un círculo vicioso

El análisis comparativo de los informes CCC 2023 y el Índice Global de Crimen Organizado permite identificar múltiples interrelaciones entre la corrupción y las actividades delictivas en Paraguay. Lejos de ser fenómenos aislados, estos problemas se retroalimentan y configuran un círculo vicioso que erosiona la calidad democrática y el estado de derecho.

Por un lado, la corrupción sistemática en las instituciones públicas crea oportunidades y facilita la expansión del crimen organizado.

La venalidad de funcionarios en áreas clave como aduanas, fuerzas de seguridad y sistema judicial permite el tráfico ilegal de bienes, el lavado de activos y la evasión de la persecución penal. Al mismo tiempo, el financiamiento ilícito de la política por parte de grupos criminales captura las decisiones públicas y genera una "impunidad selectiva" para ciertos delitos.

Por otro lado, el poder económico y la capacidad de intimidación de las organizaciones delictivas profundizan la corrupción y debilitan aún más las instituciones democráticas.

Los sobornos, las amenazas y la violencia son utilizados para cooptar funcionarios, silenciar opositores y garantizar la continuidad de los negocios ilegales. Esto genera un clima de miedo y desconfianza que aleja a la ciudadanía de la esfera pública y desmotiva la denuncia y el control social.

Estas interrelaciones configuran una

verdadera "trampa" de la ilegalidad, en la que la corrupción y el crimen organizado se convierten en problemas estructurales y de difícil reversión.

Así, en el Paraguay de hoy en día, se generaron dos fenómenos unidos entre sí: una "captura del Estado", por parte de intereses mafiosos, que cooptaron económica y políticamente a agentes públicos y privados para mantener sus privilegios y ganancias, junto con un "Estado cómplice", ejercido por políticos y funcionarios corruptos, mismos que han visto al crimen organizado como un fin de progreso económico, principalmente.

Ante esto, la democracia del país se vacía de contenido y legitimidad, al tiempo que aumenta la violencia, la inseguridad y la exclusión social

Implicancias para la institucionalidad democrática y el desarrollo

Los altos niveles de corrupción y la criminalidad organizada tienen profundas implicancias para la calidad de la democracia y las perspectivas de desarrollo de Paraguay.

En primer lugar, socavan la legitimidad y la confianza en las instituciones públicas, percibidas como cómplices, ineficientes, parciales y cooptadas por intereses particulares. Esto genera un clima de desafección política y apatía ciudadana que debilita la participación y el control social.

En segundo término, distorsionan la economía y generan incentivos perversos para la inversión y la innovación. La corrupción aumenta los costos de transacción, genera incertidumbre jurídica y desalienta la competencia leal. El lavado de activos y la informalidad asociada a las economías ilegales reducen la base tributaria y limitan los recursos disponibles para las políticas públicas. Como resultado, se profundizan las desigualdades y se obstaculiza la creación de oportunidades para el desarrollo humano.

En tercer lugar, la violencia y la inseguridad asociadas al crimen organizado vulneran los derechos humanos y deterioran la calidad de vida de la población, especialmente de los sectores más vulnerables. La penetración territorial de grupos armados ilegales impone lógicas de control social basadas en el miedo y la coerción, que restringen libertades básicas y generan desplazamientos forzados. Además, la criminalidad desvía recursos públicos hacia el gasto en seguridad en detrimento de la inversión social.

Finalmente, la corrupción y el crimen organizado debilitan la proyección internacional del país y su capacidad para enfrentar desafíos transnacionales. La reputación de Paraguay como un "hub" del tráfico ilegal y el lavado de dinero daña su imagen externa, ahuyenta inversiones de calidad y dificulta el acceso a mercados y cooperación internacional. Al mismo tiempo, la porosidad de las fronteras y la limitada capacidad institucional obstaculizan una participación efectiva en mecanismos regionales de integración y seguridad.

CONCLUSIONES

El análisis comparativo de los informes CCC 2023 y el Índice Global de Crimen Organizado permite concluir que la corrupción y la criminalidad organizada son dos fenómenos interrelacionados que configuran un escenario, de alta complejidad, en el Paraguay actual. A pesar de ciertos avances normativos e institucionales, persisten debilidades estructurales que limitan la capacidad del país para enfrentar estas amenazas de manera efectiva.

Entre los principales hallazgos se destaca la captura de las instituciones públicas por parte de intereses mafiosos, que cooptan a agentes estatales y privados para facilitar sus actividades ilícitas y garantizar impunidad. Esto se evidencia en la influencia de actores criminales en el financiamiento de la política, la venalidad de funcionarios en áreas clave y la politización de la justicia. Como resultado, se erosiona la legitimidad democrática y se profundiza la desconfianza ciudadana.

Con respecto a la complicidad estatal, es una realidad que lo ilegal ha traído demasiados

favores a lo legal, políticos y funcionarios públicos, siendo estos sus principales fomentadores e interesados que continúe funcionando lo ilícito. Así, la policía, los políticos, los militares, el Estado y todo lo legal fue sinónimo de corrupción, muerte, desidia, falta de oportunidades e injusticias.

Asimismo, se advierte sobre la diversificación y peligrosidad de los mercados y actores criminales que operan en el territorio paraguayo. El tráfico de armas y drogas, la extorsión y el lavado de activos emergen como problemáticas de gran escala, que involucran a organizaciones locales y transnacionales en connivencia con élites políticas y económicas. Esto genera un clima de violencia e inseguridad que vulnera derechos y deteriora la calidad de vida de la población.

Frente a este escenario, resulta imperativo fortalecer la institucionalidad democrática y la capacidad estatal para prevenir y combatir la corrupción y el crimen organizado de manera integral. Esto implica avanzar en reformas que garanticen la independencia y eficacia de los organismos de control, la transparencia en la gestión pública y el financiamiento de la política, y la profesionalización de las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia.

Asimismo, se requiere una mayor articulación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado para promover una cultura de la legalidad y la integridad. La movilización ciudadana y el periodismo de investigación son actores clave para visibilizar y denunciar prácticas corruptas, mientras que el empresariado debe asumir su responsabilidad en la prevención y sanción de estos delitos. La educación y la sensibilización social emergen como herramientas fundamentales para cambiar percepciones y comportamientos arraigados.

En el plano internacional, es necesario fortalecer la cooperación regional y global para enfrentar la naturaleza transnacional del crimen organizado. Esto implica mejorar los mecanismos de intercambio de información y asistencia legal, armonizar legislaciones y procedimientos, y participar activamente en iniciativas multilaterales de lucha contra la delincuencia. Solo a través de un enfoque multidimensional y coordinado será posible desarticular las redes criminales y prevenir su reconstitución.

En definitiva, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en Paraguay requiere un compromiso sostenido de todos los actores sociales y una mirada de largo plazo.

Más allá de medidas puntuales o coyunturales, se trata de construir un proyecto de país basado en la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al estado de derecho. Solo así será posible consolidar una democracia de calidad, que genere oportunidades de desarrollo para toda la ciudadanía.

REFERENCIAS

Acemoglu, D., y Robinson, J. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business.

Bailey, J., y Taylor, M. (2009). Evade, corrupt, or confront? Organized crime and the state in Brazil and Mexico. *Journal of Politics in Latin America, 1*(2), 3-29.

Bovierro, P. (2002). Organized crime and institutional quality. University of California, San Diego.

Control Risks. (2023). *Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2023*. Control Risks Group Limited.

Duarte, R. (2022). Paraguay: entre la corrupción y el crimen organizado. *Análisis Carolina*, (35), 1-14.

Gambetta, D. (1993). *The Sicilian Mafia: the business of private protection*. Harvard University Press.

Garay-Salamanca, L. J., y Salcedo-Albarán, E. (2012). *Narcotráfico, corrupción y Estados: cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y México*. Debate.

Husted, B. (1999). Wealth, culture, and corruption. *Journal of International Business Studies, 30*(2), 339-359.

Mauro, P. (1995). Corruption and growth. *The Quarterly Journal of Economics, 110*(3), 681-712.

Méon, P., y Sekkat, K. (2005). Does corruption grease or sand the wheels of growth? *Public Choice, 122*, 69-97.

Moriconi, M., y Peris, C. (2019) Merging legality with illegality in Paraguay: the cluster of order in Pedro Juan Caballero, Third World *Quarterly, 40*(12), 2210-2227. https://doi.org/10.1080/01436597.2019.1636225

Nagle, L. (2002). The Challenges of fighting global organized crime in Latin America. *Fordham International Law Journal, 26*(6), 1649-1715.

Naím, M. (2006). *Illicit: How smugglers, traffickers and copycats are hijacking the global economy*. Doubleday.

Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2023). *Índice Global de Crimen Organizado 2023*. Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

Peris, C. (2024). El dilema del Estado en el cultivo de marihuana en Paraguay: percepciones de una comunidad cultivadora de cannabis sobre la policía y lo legal e ilegal. *e-l@tina. Revista electronica de Estudios Latinoamericanos, 22(86)*.

Perz, A. (2023). Corruption and organized crime: two sides of the same coin? International Journal of Law, Crime and Justice, 38(2), 34-51.

Rojas Aravena, F. (2006). El crimen organizado internacional: una grave amenaza a la democracia en América Latina y el Caribe. FLACSO.

Rose-Ackerman, S., y Palifka, B. (2006). Corruption and government: Causes, consequences, and reform. Cambridge University Press.

Salgado, E. (2013). The cultural roots of corruption: An ethical investigation. Peter Lang.

Schelling, T. (1971). What is the business of organized crime? Journal of Public Law, 20, 71-84.

Seligson, M. (2002). The impact of corruption on regime legitimacy: A comparative study of four Latin American countries. Journal of Politics, 64(2), 408-433.

Transparency International. (2021). Corruption Perceptions Index 2021. Transparency International.

UNODC. (2021). Global Report on Corruption. United Nations Office on Drugs and Crime.

Wagley, J. (2006). *Transnational organized crime: Principal threats and US responses*. Congressional Research Service, Library of Congress.

Warren, M. (2004). What does corruption mean in a democracy? American *Journal of Political Science, 48*(2), 328-343.

Información sobre el Autor
Carlos Peris. Posee estudios postdoctorales en la Universidad Sorbona Paris 3. Doctorado en Ciencias Sociales. Licenciatura en Sociología. Investigador PRONII-CONACYT. Punto focal Ciencias Sociales, UNESCO-PY. Miembro de la Academia Paraguaya de la Historia y de la Sociedad Paraguaya de Sociología. Docente en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Editor Jefe de la Revista Estudios Paraguayos (CEADUC) y Coeditor de la Revista Paraguaya de Sociología (CPES). Medalla al Mérito "Domingo Martínez de Irala" de la Ciudad de Asunción por "Labores en Investigación".
Email: carlosperisc@gmail.com

Conflicto de Interés
El autor declara no poseer conflictos de intereses.

Fuente de Financiamiento
Sin financiación.

Cita
Peris, C. (2024). Paraguay en la encrucijada: avances y retrocesos en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado según los índices CCC y GI-TOC de 2023. *Revista Kera Yvoty: reflexiones sobre la cuestión social*, *9*(1), 1-10. https://doi.org/10.54549/ky.9.2024.e4232